

BOLETÍN

Relatoría

Jurisprudencia

Protección laboral por maternidad:
despido de trabajadora embarazada

Medidas urgentes para evitar colapso
ambiental en el relleno sanitario de
Pitalito

Sin inhabilidad alcalde de Rivera por
parentesco con rectora de la
Universidad Surcolombiana

Uso excesivo de la fuerza: muerte de
civil en persecución policial

Orden de retiro de residuos en el río
Las Ceibas

Estado responsable por pérdida de
bienes incautados

**Marzo – Abril
2025**

***Tribunal Administrativo
del Huila***



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

GRATUITA

Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

TABLA DE CONTENIDO

ACCIÓN DE TUTELA

Rad. 41001-33-33-008-2025-00029-01 Amparo del derecho de petición en materia pensional	pág. 4
Rad. 41001-33-33-002-2025-00033-01 Derecho a la estabilidad laboral reforzada por maternidad / Despido de trabajadora embarazada	pág. 6

ACCIÓN POPULAR

Rad. 41001-23-33-000-2023-00103-00 Orden de adopción de medidas urgentes para evitar colapso ambiental en el relleno sanitario de Pitalito	pág.8
Rad. 41001-33-33-009-2017-00272-01 Orden de liberación de residuos sólidos y materiales al interior y en la rivera del río Las Ceibas	pág. 10
Rad. 41001-33-33-005-2023-00103-01 Orden de pavimentación y/o Rehabilitación de Tramo vial La Palma – Elías	pág. 12

OBSERVACIÓN

Rad. 41001-23-33-000-2025-00008-00 Falta de competencia del alcalde para modificar o adicionar el presupuesto / Invalidez acuerdo municipal	pág. 14
--	-------------------------

NULIDAD

Rad. 41001-33-33-006-2023-00141-01 Acto de reestructuración de la planta de personal/ Nulidad por falsa motivación del acto administrativo	pág. 16
---	-------------------------

NULIDAD ELECTORAL

Rad. 41001-23-33-000-2023-00426-00 Ausencia de inhabilidad del alcalde por parentesco con rectora de la Universidad Surcolombiana	pág. 18
--	-------------------------

REPARACIÓN DIRECTA

Rad. 41001-23-33-000-2021-00057-00 Responsabilidad del estado en caso de pérdida o deterioro de bienes incautados / Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia	pág. 20
Rad. 41001-33-33-002-2016-00100-01 Uso desproporcionado de la fuerza/ Falla del servicio por muerte de civil en persecución adelantada por agente del estado	pág. 22

Rad. 41001-33-33-002-2014-00587-01

Responsabilidad del estado en la prestación del servicio médico/ Paciente con síndrome de down y cardiopatía congénita / Omisión de estabilización y remisión de la paciente [pág. 24](#)

Rad. 41001-33-33-002-2016-00486-01

Falta de configuración de los elementos de la responsabilidad del estado/ Falta de prueba de hurto de partes de vehículo inmovilizado [pág. 26](#)



Magistrado Ponente: Gerardo Iván Muñoz Hermida
Instancia: Segunda
Radicación: 41001-33-33-008-2025-000-29-01
Accionante: MARIA LOURDES PERDOMO SALAZAR
Accionado: UNIDAD PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -
UGPP
Fecha: 14 de marzo de 2025

AMPARO DEL DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA PENSIONAL

Problema Jurídico

“Se contrae a establecer sí se debe revocar el fallo impugnado, precisando si la accionada vulneró los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, seguridad social y mínimo vital; al no emitir una respuesta de fondo y completa a la petición que la accionante le radicó el 28 de septiembre de 2024 solicitándole el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes.”

Extracto

“La Sala advierte que contrario a lo indicado por el a quo respecto al tiempo de respuesta para resolver las solicitudes de (pensión de sobrevivientes) 4 meses, es preciso resaltar el pronunciamiento hecho por la Corte Constitucional en Sentencia T-744 de 2015, el cual se refirió a los términos para resolver solicitudes referentes a prestaciones económicas pensionales. (...)

Conforme lo anterior, la Sala concluye que el término para resolver peticiones referentes a prestaciones económicas de pensión de sobrevivientes es de 2 meses, contados a partir de la radicación de la petición, de conformidad con la norma especial (art. 1 Ley 717 de 2001).

Así las cosas, de acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial citado ad supra, y los hechos probados, en el sub lite se advierte que la UGPP vulneró los derechos fundamentales de petición, debido proceso¹⁵ seguridad social¹⁶ y mínimo vital de la accionante; porque no le resolvió de fondo la petición de pensión de sobrevivientes que radicó el 28 de septiembre de 2024, bajo el número 20240401602083062, dentro del término consagrado en el artículo 1 de la Ley 717 de 2001 (2 meses siguientes a la

radicación), el cual se encuentra vencido desde el 28 de noviembre de ese mismo año (hace más de 3 meses).

Al respecto, la Sala agrega que no se corroboró que la suspensión de términos administrativos que la accionada decretó el 24 de diciembre de 2024 (Resolución 1338) haya influido en el cómputo del término de respuesta citado anteriormente, ya que este último ya se encontraba vencido para ese momento.

Por consiguiente, la Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, el 13 de febrero de 2025, que resolvió amparar los derechos fundamentales solicitados por la señora MARÍA LOURDES PERDOMO DE SALAZAR.”

[Sentencia del 14 de marzo de 2025, M.P: GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA, radicación: 41001 33 33 008 2025 0002901](#)



Magistrada Ponente:	Jorge Alirio Cortes Soto
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001-33-33-002-2025-00033-01
Demandante:	Dannia Gissella Zuleta Quintero
Demandado:	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) – Regional Huila, Corporación Minuto de Dios de Garzón – Colegio Gimnasio
Fecha:	01 de abril de 2025

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR MATERNIDAD/ DESPIDO DE TRABAJADORA EMBARAZADA

Asunto

“Se plantea a la Sala decidir:

Se debe revocar el fallo de primera instancia, porque la CORMIDI es una entidad sin ánimo de lucro que ha garantizado los derechos fundamentales de la actora, en cuanto sus servicios y su vinculación sólo puede continuar durante la ejecución de los contratos de aportes suscritos con el ICBF, pues su función social se limita únicamente a ellos y ya vinculó a la actora en fase de alistamiento en el contrato de aportes No. 41002402025 a ejecutarse en Neiva.”

Extracto

“El Tribunal considera que debe revocar la sanción del artículo 239-3 del CST impuesta a la CORMIDI y la exhortación dispuesta para el ICBF pues ello no deriva del contrato de aportes celebrado y, confirmar el amparo de los derechos incoados en relación con CORMIDI en el cumplimiento de la estabilidad laboral reforzada. (...)

La demandada CORMIDI formula reparos al fallo impugnado, porque es una entidad sin ánimo de lucro que ha garantizado los derechos fundamentales de la actora, en cuanto sus servicios y su vinculación sólo puede continuar durante la ejecución de los contratos de aportes suscritos con el ICBF, pues su función social se limita únicamente a ellos y los contratos de la vigencia 2025 no habían iniciado al tiempo del retiro de la actora a quien ya vinculó en fase de alistamiento en el contrato de aportes No. 4100240202.

Para resolver lo anterior se tiene que la naturaleza de ser la CORMIDI una entidad sin ánimo de lucro, en manera alguna incide para ser excluida de dar la protección laboral

reforzada a la mujer embarazada, como tampoco lo excluye el hecho de haber vinculado a la actora mediante contrato de prestación de servicios pues ello resulta irrelevante frente a la protección constitucional. (...)

...sí asistía al demandante derecho a tener la protección reforzada de la maternidad y conservar su relación contractual en caso de subsistir la causa del contrato de prestación de servicios, pero como así no acaeció, porque el contrato de aportes No. 41-00140-2024 se ejecutó y concluyó el 23 de diciembre de 2024 con ello se cumplió la cláusula resolutoria, por eso la entidad debió mantenerle su afiliación a la seguridad social pues la demandante sólo podía asumir su pago, como era su obligación, a partir del ingreso que percibía con el contrato de prestación de servicios y terminado el mismo, debía asumirlo su contratante en pro del fuero laboral reforzado y por eso el amparo otorgado en primera instancia a los derechos incoados, debe mantenerse.”

[Sentencia del 01 de abril de 2025, M.P: JORGE ALIRIO CORTES SOTO , radicación: 41001 33 33 002 2025 00033 01](#)



Magistrado Ponente:	Nelcy Vargas Tovar
Instancia:	Primera
Radicación:	41001-23-33-000-2023-00103-00
Demandante:	Procurador 11 Judicial II Ambiental y Agrario de Neiva
Demandado:	Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Otros
Fecha:	11 de marzo de 2025

ORDEN DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA EVITAR COLAPSO AMBIENTAL EN EL RELLENO SANITARIO DE PITALITO

Problema Jurídico

“Corresponde a la Sala determinar si se encuentra acreditada la vulneración de los derechos colectivos invocados por el actor popular, con ocasión al inminente colapso del relleno sanitario ubicado en el municipio de Pitalito (H), operado por la empresa Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P., donde se realiza la disposición final de residuos sólidos provenientes de los municipios de Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías, Palestina y San Agustín.”

Extracto

“Si bien, podría indicarse que, el inminente colapso y clausura del relleno sanitario, advertido en el escrito inicial por el actor popular, en virtud al lleno total de los vasos dispuestos en el mismo para el almacenamiento de los residuos sólidos provenientes de los 9 municipios accionados, en la actualidad se encuentra superado con ocasión a la construcción de la aludida celda de ampliación, lo cierto es que, una vez esta última arribe a la finalización de su vida útil, la problemática que dio inicio al presente medio de control volverá a surgir.

Así las cosas, en atención a que, conforme el artículo 2 de la Ley 472 de 1998, la acción popular ostenta carácter, y naturaleza eminentemente preventiva, en virtud a que se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible, esta Corporación, a efectos de zanjar a largo plazo la situación fáctica aquí expuesta, declarará configurada la amenaza de vulneración de los derechos colectivos y, en consecuencia, impartirá las siguientes órdenes:

1. A Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.:

1.1. Realizar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, un estudio técnico especializado, a través del cual se pueda determinar con probabilidad de verdad la proyección en años de vida útil de la actual celda de almacenamiento de disposición final de residuos sólidos que se encuentra en funcionamiento en el relleno sanitario ubicado en el Municipio de Pitalito – Huila. (...)

1.2. Una vez culminado el plazo establecido en el numeral anterior, y, con base en los resultados arrojados por el aludido estudio técnico especializado, adelantar, conforme la normatividad vigente en el ordenamiento jurídico sobre la materia, todas las diligencias, gestiones y acciones necesarias para la construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo relleno sanitario, o, la ampliación del ya existente, según sea el caso. (...)

1.3. Vencido el término otorgado a los entes territoriales para adoptar, implementar y/o actualizar, según sea el caso, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, abstenerse de recibir residuos sólidos de los municipios que se sirven del relleno sanitario de Pitalito (H), si no llegan debidamente separados, y aptos para su disposición final.

2. A los Municipios de Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías, Palestina y San Agustín, adoptar, implementar y/o actualizar (...) el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. (...)

3. A la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM:

3.1. Prestar asesoría técnica, y ejercer funciones de control y seguimiento, a los Municipios accionados, en la formulación de planes y programas en materia de protección ambiental. (...)

3.2. Prestar asesoría técnica a Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P., en la estructuración de los proyectos a presentar (...) correspondientes a las obras requeridas en relación con la ampliación y/o construcción de un nuevo sitio destinado para la disposición final de los residuos sólidos.”

[Sentencia del 11 de marzo de 2025, M.P NELCY VARGAS TOVAR, radicación: 41001-23-33-000-2023-00103-00](#)



Magistrado Ponente:	José Miller Lugo Barrero
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 009 2017 00272 01
Demandante:	Orlando Pascuas Tamayo y Otros
Demandado:	Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional y Otros
Fecha:	11 de marzo de 2025

ORDEN DE LIBERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MATERIALES AL INTERIOR Y EN LA RIVERA DEL RÍO LAS CEIBAS

Problema Jurídico

“Como el a quo accedió las pretensiones de la demanda y las entidades demandadas recurren tal decisión, la Sala, conforme el artículo 328 del CGP debe determinar, si ¿si debe revocarse o confirmarse la sentencia de primera instancia que accedió a la protección de los derechos colectivos contenidos en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998¹⁴; e impartió órdenes precisas a las entidades demandadas, tendientes a garantizar, controlar y proteger tales derechos?”

Extracto

“TERCERO: ORDENAR al Municipio de Neiva, CAM, Ciudad Limpia S.A. E.S.P. y a los particulares Jhon Jairo Perdomo, Global de Colombia S.A.S y Sociedad Inversiones El Tejar Ltda. que dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de este fallo.

- 3.1. Ejecuten los trabajos de liberación de residuos sólidos ordinarios que se encuentran en los siguientes predios. (...)
- 3.2. Ejecuten los trabajos de liberación de materiales que se encuentran ubicados al interior del río Las Ceibas del Municipio de Neiva en el sector indicado en el ordinal anterior.
- 3.3. Garanticen los trabajos de liberación de escombros, muebles, colchones, maderas y demás desechos ubicados en el sector ya señalado.
- 3.4. Instalen señales en los predios enlistados que informen a la comunidad la prohibición de botar residuos en el sector.

3.5. Que la CAM emita un concepto técnico que determine la gravedad de los daños causados a la vegetación y a todo el ecosistema del sector señalado y las actuaciones que permitan reparar técnicamente la zona. (...)

QUINTO: ORDENAR al Municipio de Neiva y a la CAM que realicen controles mensuales a las personas naturales y jurídicas que se encuentren adelantando obras de construcción en la jurisdicción del Municipio de Neiva. En el caso de los contratistas del Municipio que se encuentren adelantando obras públicas, se exigirá el cumplimiento de la normatividad legal ambiental relacionada con el manejo de RCD y demás desechos para el pago de las cuentas de cobro parciales y definitivas que adeude la administración municipal.

Asimismo, que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, garantice que en la operación y funcionamiento del sitio de disposición final de residuos de construcción y demolición – RCD se cumpla con los planes de Manejo Ambiental y de Contingencia.

SÉPTIMO: ORDENAR al Municipio de Neiva que dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de este fallo pongan en funcionamiento el programa de selección de residuos sólidos en toda la ciudad de Neiva, de conformidad con lo señalado en el Decreto 322 del 5 de junio de 2019, a fin de tratar adecuadamente el proceso de generación de residuos.

OCTAVO: ORDENAR al Municipio de Neiva, a la CAM, a Ciudad Limpia S.A. ESP y a la Policía Nacional adelantar con prontitud y eficacia acciones de vigilancia, los procesos sancionatorios y de prevención, a que haya lugar en el marco de lo establecido en la normatividad vigente.”

[Sentencia del 11 de marzo de 2025, M.P: JOSÉ MILLER LUGO BARRERO, radicación: 41001-33-33-009-2017-00272-01](#)



Magistrado Ponente:	Enrique Dussán Cabrera
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001-33-33-005-2023-00103-01
Demandante:	Personero Municipal de Elías -Huila
Demandado:	Departamento del Huila
Fecha:	01 de abril de 2025

ORDEN DE PAVIMENTACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE TRAMO VIAL LA PALMA – ELÍAS

Problema Jurídico

“Corresponde establecer si se debe revocar o confirmar el fallo impugnado, y precisar:

- i) Si hay carencia de pruebas en el proceso que demuestren la vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados.
- ii) De existir la vulneración o la amenaza, si la falta de recursos o de disponibilidad presupuestal, constituyen justificación o causa de exoneración para no proteger los derechos amenazados ni tomar medidas que cesen la situación de amenaza si es ésta la que se presenta.
- iii) Si el juez de primera instancia debió dar aplicación a la SU-1052 de 2000, que establece que los jueces constitucionales deben ser cautelosos al intervenir en asuntos que son competencia de otras autoridades, especialmente en decisiones que implican la distribución de recursos públicos o la ordenación de obras públicas.”

Extracto

“Para la Sala es evidente la vulneración actual del derecho colectivo al goce del espacio público, siendo latente su amenaza, dado que existe un escenario de peligro para la población, lo que en determinado momento podría imposibilitar su circulación por cuanto el tránsito vehicular y hasta peatonal podrían abstenerse de hacerlo por no tratarse de una vía segura, constituyéndose entonces en un foco amenazante para el disfrute pleno del derecho al espacio público. (...)”

Por tal razón se hace necesaria la protección del derecho a la seguridad pública amenazado, con el ánimo de prevenir la consumación de la vulneración de tal derecho y de la ocurrencia de una calamidad o accidente que pueda generarse por

esta situación. Por ende, comparte la Sala la protección de los derechos protegidos por el a-quo. (...)

En este orden de ideas no son de recibo los argumentos expuestos por el departamento del Huila sobre la ausencia de recursos frente a la problemática que padecen los habitantes del municipio de Elías por el mal estado de la vía en el tramo que conduce de La Palma a Elías, supone en consecuencia que ha de disponerse los recursos que requieran su atención, y al probarse, como se encuentra probada, la amenaza de los derechos para los que se reclama amparo, se deben adoptar las medidas de planeación y programación necesarias para la salvaguarda de los mismos, así como la adopción de las medidas que sean necesarias para brindar el amparo que corresponda, como así lo indicó el juez de instancia.”

[Sentencia del 01 de abril de 2025, M.P: ENRIQUE DUSSÁN CABRERA, radicación: 41 001- 33 -33- 005- 2023 -00103 -01](#)



Magistrado Ponente:	Gerardo Iván Muñoz Hermida
Instancia:	Única
Radicación:	41001-23-33-000-2025-00008-00
Demandante:	Departamento del Huila
Demandado:	Acuerdo Municipal No. 035 del 23 de noviembre de 2024 del Concejo Municipal de El Agrado – Huila
Fecha:	04 de marzo de 2025

FALTA DE COMPETENCIA DEL ALCALDE PARA MODIFICAR O ADICIONAR EL PRESUPUESTO / INVALIDEZ ACUERDO MUNICIPAL

Extracto

“Estima el Gobernador del Departamento por conducto del Director del Departamento Administrativo Jurídico que el Acuerdo Municipal No. 035 del 23 de noviembre de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE A LA ALCALDESA MUNICIPAL DE EL AGRADO HUILA PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL PREPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2024”, proferido por el Concejo Municipal de El Agrado – Huila, se encuentra afectado en su validez por la vulneración de los artículos 313, 345, 352 y 353 de la Constitución Política; 76 a 88 del Decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional- y el artículo 32 numeral 9 de la Ley 136 de 1994, ciñendo como cargo único la autorización inapropiada de la Alcaldesa de El Agrado para realizar traslados presupuestales entre los grupos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión “y los demás que se ajusten a la ley entre los diferentes sectores” y hacer adiciones mediante Decreto.”

“De tal manera que, el Concejo Municipal de El Agrado no limitó la facultad otorgada a la alcaldesa exclusivamente para que realizara movimientos presupuestales internos de recursos, sino que, por el contrario, la autorizó para que de forma general los realizara, permitiéndole ejecutar adiciones o traslados presupuestales que alteren el monto total del presupuesto de rentas y de gastos, lo que a todas luces es competencia exclusiva del Concejo Municipal.

Ciertamente, en el acuerdo demandado no se hace la salvedad de que se trata de movimientos presupuestales internos o que se trata de recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos; desconociendo que, es el Concejo Municipal y no el alcalde quien debe autorizar como se deben invertir los dineros del erario, con base en tales principios, por lo que se concluye que el ejecutivo

municipal no puede ordinariamente modificar y mucho menos adicionar el presupuesto, pues se repite que tal atribución corresponde al concejo municipal, ya que implica la variación o aumento de las partidas aprobadas por el cuerpo colegiado.

Por consiguiente, se declarará la invalidez del Acuerdo Municipal No. 035 del 23 de noviembre de 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE A LA ALCALDESA MUNICIPAL DE EL AGRADO HUILA PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL PREPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2024", expedido por el Concejo Municipal de El Agrado – Huila."

[Sentencia del 04 de marzo de 2025, M.P: GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA, radicación: 41001-23-33-000-2025-00008-00](#)



Magistrado Ponente:	Ramiro Aponte Pino
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001-33-33-006-2023-00141-01
Demandante:	Jan Marco Cortés Guzmán
Demandado:	Municipio de Pitalito (H)
Fecha:	04 de marzo de 2025

ACTO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL/NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Problema Jurídico

“En razón a que el fallo solo fue impugnado por la parte actora; al tenor de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso³ (aplicable por expresa remisión del artículo 306 del Cpaca), sólo se abordará el análisis de los argumentos esbozados en el escrito contentivo del recurso, y en razón a los múltiples argumentos de disenso que se esgrimen, el sub lite se contrae a establecer si se debe revocar la sentencia; en especial, precisar lo siguiente:

- i) Si a través de los actos enjuiciados se modificó la planta de personal, en los términos del Decreto 1083 de 2015.
- ii) Si para expedir los decretos 355 de 2021 y 362 de 2022 se contaba con el estudio de viabilidad presupuestal (artículo 71 del decreto 111 de 1996); en caso negativo, si esa omisión afectaba la validez de los mismos.
- iii) Si el estudio técnico en que se soportó la alegada reforma de la planta de personal, satisfizo los requisitos establecidos en la guía de diseño y rediseño elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (artículo 46 de la Ley 909 de 2004), y establecer si el estudio técnico realizado en la anualidad 2021 se podía tener en cuenta para expedir el decreto 362 de 2022.”

Extracto

“Descendiendo al asunto sub examine; contrario a lo que se aduce en la parte motiva de los actos acusados, se puede colegir que en el proceso de modificación de la planta de personal no se contó con el respectivo certificado de viabilidad presupuestal (cvp). Prueba de ello, es la comunicación del 26 de abril de 2023, en la cual, el secretario de hacienda manifestó que su dependencia no participó en el proceso de elaboración del documento de costos comparativos frente a la propuesta de rediseño, y que no

expidió el certificado dando fe de que el municipio contaba con recursos necesarios para la implementación del rediseño de la planta. (...)

e. En ese orden de ideas, y en razón a que prosperó el cargo relacionado con la falsa motivación respecto a la inexistencia del certificado de viabilidad presupuestal, se prescinde del análisis de los demás argumentos planteados en la alzada.

f. Así las cosas, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará la nulidad del decreto 355 de 2021 "Por el cual se establece la planta de personal de la alcaldía de Pitalito", y del decreto 362 de 2022 "Por el cual se modifica el Decreto 355 del 30 de diciembre de 2021 y se adopta la nueva planta de personal de la alcaldía del Municipio de Pitalito".

g. Finalmente, es del caso resaltar que de acuerdo con el precedente contencioso administrativo⁷, por regla general, las sentencias de nulidad producen efectos extunc, es decir, hacia el pasado; en la medida en que se restablece la situación jurídica que se encontraba vigente en el momento de la expedición del acto administrativo enervado; sin embargo, por seguridad jurídica no se pueden afectar las situaciones jurídicas consolidadas (aquellas que en esta instancia no son susceptibles de ser discutidas en vía administrativa o jurisdiccional."

[Sentencia del 04 de marzo de 2025, M.P: RAMIRO APONTE PINO, radicación: 41 001 33 33 006-2023-00141-01](#)



Magistrado Ponente:	José Miller Lugo Barrero
Instancia:	Primera
Radicación:	41001-23-33-000-2023-00426-00
Demandante:	Juan Sebastián Puentes Puentes y Jhon Faiver Arce Trujillo
Demandado:	Acto de elección del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán como alcalde del municipio de Rivera Huila
Fecha:	11 de marzo de 2025

AUSENCIA DE INHABILIDAD DEL ALCALDE DE RIVERA POR PARENTESCO CON RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Problema Jurídico

“De acuerdo con la fijación del litigio definido en providencia del 22 de noviembre de 2024, corresponde a la Sala resolver ¿si las Actas de Escrutinio formularios E-24 ALC del 1° de noviembre de 2023 y E-26 ALC del 2 de noviembre de 2023 expedidos por la Comisión Escrutadora del Municipio De Rivera - Huila, por medio del cual declaró electo al señor LUIS HUMBERTO ALVARADO GUZMÁN como alcalde municipal, para el periodo constitucional 2024-2027, se encuentran viciadas de nulidad al encontrarse inhabilitado al tener parentesco con persona que ejerció autoridad administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección?. De ser así, se decidirá si procede cancelar la credencial del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán como alcalde del municipio de Riera – Huila.”

Extracto

“La Sala encuentra que, además de que no se demostró la materialización del ejercicio de autoridad administrativa en el municipio de Rivera, por parte de la señora rectora de la Universidad Surcolombiana, dentro del periodo inhabilitante, tampoco se identificó, pues no era necesario, si los contratos suscritos por la Universidad Surcolombiana incidieron en la comunidad electoral, pues ello solo se analiza cuando se presentan irregularidades en la jornada electoral y no en asuntos netamente subjetivos.

En resumen: la Sala negará las pretensiones de la demanda, pues no se aportó al proceso medios idóneos que acrediten el ejercicio de autoridad administrativa por parte de la rectora de la Universidad Surcolombiana dentro de los doce (12) meses

anteriores a las elecciones territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023 y que ello le otorgó ventajas a su hijo Luis Humberto Alvarado Guzmán, esto es, se concluye que no estaba inhabilitado para participar como candidato a la Alcaldía del municipio de Rivera – Huila en las elecciones territoriales 2024-2027, en los términos establecidos en el artículo 95-4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.”

[Sentencia del 11 de marzo de 2025, M.P: JOSÉ MILLER LUGO BARRERO, radicación: 41001-23-33-000-2023-00426-00](#)



Magistrada Ponente:	Nelcy Vargas Tovar
Instancia:	Primera
Radicación:	41001-23-33-000-2021-00057-00
Demandante:	Noraida Francisca Guevara Meneses
Demandado:	Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación
Fecha:	04 de marzo de 2025

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO DE BIENES INCAUTADOS / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Problema Jurídico

“Con fundamento en la fijación del litigio efectuada en audiencia inicial del 28 de septiembre de 2022⁴⁵, el problema jurídico en este asunto se centra en determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa, patrimonial y extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Nación – Fiscalía General de la Nación, por la presunta falla en el servicio con ocasión a la no devolución de la suma de 180.000 dólares americanos, de propiedad de la demandante, los cuales se encontraban en custodia por haber sido incautados al señor Redin Diomedes Guevara Meneses, en hechos ocurridos el 21 de diciembre de 2018.”

Extracto

“Para la Sala, se encuentra suficientemente acreditado que, al capturarse en flagrancia a Redin Diomedes Guevara Meneses el 21 de diciembre de 2018¹⁴⁴, el personal de la Policía Nacional incautó \$180.000 dólares en efectivo, según consta en la respectiva acta de incautación¹⁴⁵. Luego, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, se legalizó la incautación de la moneda con fines de comiso y se suspendió el poder dispositivo de dichos bienes¹⁴⁶.

Sin embargo, el dinero no fue devuelto al terminar la investigación penal, pues las divisas desaparecieron del almacén de evidencias de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Pitalito¹⁴⁷, a donde fueron trasladadas para su custodia luego de comprobarse la autenticidad de los billetes extranjeros¹⁴⁸; circunstancia que, incluso, fue puesta en conocimiento del Juez Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento en la audiencia de preclusión del

proceso¹⁴⁹, en la que el Fiscal Cuarto Especializado de Neiva afirmó que “el dinero se perdió”¹⁵⁰, sin contar con mayores avances investigativos.

En este punto, debe precisarse –sin que ello implique un análisis de la imputación de responsabilidad– que, a juicio de esta Corporación, el daño no está representado en la inicial incautación del dinero, sino en su pérdida y en la consecuente falta de devolución. (...)

Así las cosas, se demostró la pérdida del dinero incautado, de propiedad de la señora Noraida Francisca Guevara Meneses, cuyo paradero se desconoce; hecho que constituye el daño antijurídico causado a la demandante en el presente asunto, en la medida que aquella –contrario a lo afirmado por la Policía Nacional en su escrito de contestación– no estaba en la obligación jurídica de soportar su acontecimiento. (...)

La aludida irregularidad es atribuible a las dos entidades demandadas, en la medida que les correspondía la guarda tanto material como jurídica –en los términos indicados– de los bienes implicados; con lo cual se configura una falla en el servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, al tratarse de omisiones ocurridas en el marco de una investigación penal. (...)

Conforme a lo expuesto, se declarará la responsabilidad administrativa y patrimonial tanto de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, como de la Nación – Fiscalía General de la Nación; a quienes se condenará de manera solidaria al pago de los perjuicios causados a la demandante Noraida Francisca Guevara Meneses, de acuerdo con el subsiguiente análisis.”

[Sentencia del 04 de marzo de 2025, M.P: NELCY VARGAS TOVAR, radicación: 41001-23-33-000-2021-00057-00](#)



Magistrado Ponente:	Ramiro Aponte Pino
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001-33-33-002-2016-00100-01
Demandante:	Carolina Polanía Cedeño Y Otros
Demandado:	Nación – Mindefensa – Policía Nacional
Fecha:	18 de marzo de 2025

USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA/ FALLA DEL SERVICIO POR MUERTE DE CIVIL EN PERSECUCIÓN ADELANTADA POR AGENTE DEL ESTADO

Problema Jurídico

“El sub lite se contrae a establecer si se debe revocar o modificar la sentencia; en especial, precisar: i) si se configura la culpa exclusiva de la víctima o una concurrencia de culpas, ii) de configurarse la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, determinar si se encuentra acreditado que los demandantes Carolina Polanía Cedeño y Jhonson Gómez Polanía ostentan la calidad de hermanos de la víctima y si a cada uno le corresponden 50 smlmv, por concepto de daño moral y, iii) precisar si hay lugar a revocar la condena en costas.”

Extracto

“Descendiendo al sub examine, considera la sala que se debe auscultar bajo la egida de falla del servicio; porque como ya quedara expuesto, la muerte del señor Gómez Polanía se escenificó en una persecución policial, luego de la comisión de un presunto delito de hurto; amén de que la parte actora aduce el desconocimiento del artículo 109 del decreto 522 de 1971 por el uso “desaforado y exagerado de la fuerza. (...)”

En ese orden de ideas, es menester colegir que la Policía incurrió en un uso excesivo de la fuerza; porque para detener y reducir al señor Gómez Polanía no era necesario y proporcional hacer uso de las armas de dotación con intención letal (el disparo fue propinado por la espalda); porque la intención del “sospechoso” era meramente evasiva, y en la medida en que no iba armado, no era riesgo inminente para la vida de los policiales o terceras personas.

Sin embargo, el comportamiento elusivo y temerario del señor Gómez Polanía contribuyó a la configuración del daño, porque desatendió una orden impartida por la autoridad policial y se expuso a la persecución y reacción de los agentes del orden.

En consecuencia, el quantum de los perjuicios se reducirá en un 50%.

[Sentencia del 18 de marzo de 2025, M.P: RAMIRO APONTE PINO, radicación: 41001-33-33-002-2016-00100-01](#)



Magistrado Ponente:	Jorge Alirio Cortés Soto
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001-33-33-002-2014-00587-01
Demandante:	Elsa Elidia Yepes Santiago Y O
Demandado:	Hospital San José de Isnos-H Y O.
Fecha:	01 de abril de 2025

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO / PACIENTE CON SÍNDROME DE DOWN Y CARDIOPATÍA CONGÉNITA / OMISIÓN DE ESTABILIZACIÓN Y REMISIÓN DE LA PACIENTE

Problema Jurídico

“Como ambas partes apelaron, el artículo 328 del CGP permite que el Tribunal resuelva sin limitaciones y no solo circunscrito a los reparos concretos del recurso, por eso los problemas jurídicos a resolver, son:

3.3.1. ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia por indebida valoración probatoria, pues los elementos de juicio obrantes en el proceso evidencian diligencia en la prestación del servicio de salud y no se configura responsabilidad patrimonial del Estado?

3.3.2. ¿Debe revocarse la decisión de primer grado, porque las empresas prestadoras de salud solo están obligadas a garantizar que se preste el servicio de salud, pero no intervienen en el mismo y por eso no puede haber responsabilidad solidaria entre ellas?

3.3.3. Finalmente, ¿es procedente adicionar el fallo para ordenar la indexación de la condena?

La tesis del Tribunal es que debe confirmarse la sentencia de primera instancia, toda vez que se acredita una falla en el servicio atribuible a la negligencia médica en la atención inicial, la cual compromete el curso terapéutico y condiciona negativamente la eficacia del tratamiento recibido en el centro médico de mayor complejidad al que fue finalmente trasladada la paciente y donde se produce su fallecimiento.”

Extracto

“Al abordar el nexo causal y la obligación de medio en el contexto médico, resulta indispensable un análisis riguroso del acervo probatorio para determinar la relación directa entre la atención médica deficiente y el fallecimiento de la menor Kelly Johana Bolaños Yépez. Conforme se expone en apartados anteriores, el dictamen pericial, junto con los testimonios y la historia clínica, evidencian omisiones sustanciales como la no realización de exámenes diagnósticos básicos —coproscópico y radiografía de tórax— y una remisión tardía al segundo nivel de atención. Tales fallas inciden directamente en el deterioro progresivo del estado clínico de la paciente y limitan sus posibilidades de recuperación.

En consecuencia, existe certeza de que las deficiencias en la atención médica primaria guardan un vínculo causal directo e inequívoco con el deceso de la menor, sin que se acredite intervención negligente por parte de sus padres ni causa exculpatoria alguna. La omisión institucional en la aplicación de procedimientos básicos exigidos por los protocolos médicos y guías técnicas vulneran la obligación de medio que rige el acto médico. Este incumplimiento constituye una falla en el servicio, cuya consecuencia es el daño antijurídico sufrido, de ahí que se derive la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas por el fallecimiento.”

[Sentencia del 01 de abril de 2025, M.P: ORGE ALIRIO CORTES SOTO, radicación: 41001-33-33-002-2014-00587-01](#)



Magistrado Ponente:	Enrique Dussán Cabrera
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001-33-33-002-2016-00486-01
Demandante:	Sandra Liliana Orjuela Castillo - Nohora Catherine Galvis Rubio y Otro
Demandado:	La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otro
Fecha:	08 de abril de 2025

FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALTA DE PRUEBA DE HURTO DE PARTES DE VEHÍCULO INMOVILIZADO

Problema Jurídico

“Conforme al recurso de alzada y acorde a lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, debe determinarse si las demandadas son responsables administrativa y patrimonialmente de los perjuicios causados a las demandantes, como consecuencia del hurto de la unidad de gestión de motor y la unidad electrónica de cabina de la retroexcavadora marca Volvo de martillo hidráulico EC210BLC de serie 40039, que se encontraba bajo custodia del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, por infracción a las normas de tránsito, debiéndose revocar la sentencia impugnada que negó las pretensiones de la demanda.”

Extracto

“En virtud al material probatoria analizado, la Sala no evidencia que para el momento de la incautación de la retroexcavadora marca Volvo, portara las unidades de cómputo y estuviese en óptimas condiciones de funcionamiento tal y como lo afirma la parte demandante, tampoco se acreditó que hubiesen sido hurtadas o sustraídas en el tiempo en que estuvo retenida. Obligación probatoria que le correspondía a la parte demandante, de demostrar el daño antijurídico reclamado.

Ahora bien, respecto a la carga probatoria para demostrar el daño antijurídico, el Consejo de Estado ha sido enfático en afirmar, que quien alega un daño para obtener su reparación, debe probarlo. (...)

De acuerdo con lo anterior y en virtud a todo lo expuesto, comparte la Sala los argumentos esbozados en primera instancia, al determinar que no se acreditó la ocurrencia del daño antijurídico alegado y negó las pretensiones de la demandada, de tal suerte que esta Corporación confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, el 06 de julio de 2020.”

[Sentencia del 08 de abril de 2025, M.P: ENRIQUE DUSSAN CABRERA , radicación: 41001-33-33-002-2016-00486-01](#)

NOTA

La Relatoría es la encargada de clasificar, titular y extraer los autos y sentencias de la Corporación para organizar la jurisprudencia, pero advierte a sus usuarios que no se exoneran de verificar el contenido de lo publicado en el [aplicativo SAMAI](#).

CONTÁCTENOS

Palacio de Justicia Neiva- Huila

Carrera 4 No. 6-99 Oficina 1108

Email: reltadmnei@cendoj.ramajudicial.gov.co

<http://ramajudicialdelhuila.gov.co/newSite/administrativo/>

<https://www.facebook.com/tribunaladministrativodelhuila>

BOLETÍN

Relatoría

*Tribunal Administrativo
del Huila*



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

GRATUITA